

Ejemplar: 1 peseta
 Anuncio: 3
 Suscripción año 1959: >
 Administración y venta en:
 la Intervención de la
 Excelentísima Diputación

Boletín Oficial



de la provincia de Logroño

Franquese Concertado 28/2

Se publica los martes, jueves y sábados

Deposito Legal: LO. 1-1958

Precio de inserción

Los edictos y anuncios de particulares y oficiales que sean de pago, satisfarán a razón de 250 pesetas por LINEA y los que sean de previo pago se tasarán a razón de CINCUENTA céntimos por PALABRA, cualquiera que sea el origen del edicto.

Los interesados acreditarán antes de la publicación y por medio de la correspondiente carta de pago, haber satisfecho su importe en la Depositaria de Fondos Provinciales sin cuyo requisito no se insertarán.

ADVERTENCIA: No se admitirán, para su inserción, comunicaciones que no vayan registradas del Gobierno Civil de la provincia

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA

(Higiene y Sanidad Veterinaria)

55

Al propuesta de la Jefatura del Servicio Provincial de Ganadería y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 143 del vigente Reglamento de Epizootias se declara oficialmente extinguida la enfermedad denominada fiebre aftosa y vulgarmente llamada glosopeda o patera en el ganado bovino del término municipal de Ortigosa (Peraloscin) y que fué declarada oficialmente con fecha de 13 de octubre de 1958.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Logroño 12 de enero de 1959.

El Gobernador Civil

42

Dirección General de Tributos Especiales

25

Orden de 24 de diciembre de 1958

Aprobado Convenio provincial timbre LO-3/1959, con el Grupo Provincial de Exhibición del Sindicato Provincial del Espectáculo.

Tím. Sr. Vista la propuesta elaborada por la Comisión Mixta nombrada por la Comisión Mixta nombrada por la Comisión Mixta nombrada General de Tributos Especiales de 19 de noviembre de 1958 para el estudio de las condiciones que deberán regular el convenio entre la Agrupación de contribuyentes objeto de la pre-

sente Orlen y la Hacienda Pública para la exacción del Impuesto de Timbre del Estado, este Ministerio, en uso de las facultades que le otorga el número 2 de la disposición 7 de la Orden 1º de septiembre de 1958, ha tenido a bien disponer lo siguiente

Primero.— De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de 26 de diciembre de 1957 y Orden de 1 de septiembre de 1958 se aprueba el Convenio provincial de Logroño con el número LO-3 año 1959 para la exacción del Impuesto de Timbre del Estado entre la Hacienda y la Agrupación de contribuyentes del Grupo Provincial de Exhibición del Sindicato Provincial del Espectáculo los cuales figuran relacionados en el acta de la Comisión Mixta de Logroño fecha 17 de diciembre de 1958 y por los hechos imponderables comprendidos en la misma.

Segundo.— La cuota global convenida para el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 1959 para el conjunto de contribuyentes acogidos al Convenio, se fija la cantidad de cuarenta y dos mil setecientos setenta y ocho pesetas.

Tercero.— Las normas procesales para determinar la cifra correspondiente a cada uno de los contribuyentes, serán las que por aplicación de las reglas de distribución se establecen en el acta anteriormente mencionada.

Cuarto. A partir de la fecha de entrada en vigor de este Convenio, los hechos imponderables objeto del mismo quedarán exceptuados de la obligación de reintegro sustituyéndose el uso de efectos timbrados por la mención: "Convenio prov. Timbre Lo número 3/1959.

Quinto.— La tributación aplicable a las altas y bajas producidas durante el periodo de vigencia; el procedimiento para sustanciar las reclamaciones de los agrupados y las normas y garantías para el cumplimiento y ejecución del Convenio se

ajustarán a lo que al afectado señala la Orden de 1 de septiembre de 1958.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde a V.I. muchos años.— Madrid, 24 de diciembre de 1958.— Navarro.

99

Confederación Hidrográfica del Ebro

43

SECCION DE AGUAS

Habiéndose formulado en este servicio la petición que se reseña en la siguiente

NOTA

Nombre del peticionario "Compañía Exploradora las Conehas S.A.". Domicilio en Bilbao cace de Bailén número 1 planta cuarta.

Cantidad de agua que se pide tres litros por segundo.

Corriente de donde ha de derivarse, río Ebro, en el Barrio San Felices

Términos municipales en que radicarán las obras Haro (Logroño).

Destino del aprovechamiento Usos industriales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto Ley número 23, de 7 de enero de 1927, modificado por el de 27 de marzo de 1931 y disposiciones posteriores concordantes, se abre un plazo, que terminará a las trece horas del día en que se cumplan treinta naturales y consecutivos desde la fecha siguiente inclusive, a la de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Durante este plazo, y en horas hábiles de oficina, deberá el peticionario presenciar en las oficinas de esta Sección, sitas en Zaragoza, Avenida

del General Mola número 26, el proyecto correspondiente a las obras que trata de ejecutar. También se admitirán en dichas oficinas dentro del referido plazo otros proyectos que tengan el mismo objeto que la petición que se anuncia o sean incompatibles con ella. Transcurrido el plazo fijado no se admitirán ninguno más en competencia con los presentados.

La apertura de proyectos a que se refiere el artículo 13 del Real Decreto Ley antes citado, se verificará a las diez horas del primer día laborable al de terminación del plazo de treinta días antes fijado, pudiendo asistir al acto todos los peticionarios y levantándose de ello el acta que prescribe dicho artículo, que será suscrita por los mismos.

Zaragoza 3 de enero de 1959

El Ingeniero Director Adjunto

Gómez

38

Comisaría General de Abastecimientos y Transportes

Precios máximos de frutas y hortalizas para la próxima semana

Relacion de precios máximos de venta en almacén y al detall de los productos que se indican, y que han de tener vigencia en esta capital y provincia, durante la semana comprendida en la próxima semana:

Artículos	PRECIOS	
	Almacén	Detall
Manzanas especiales	7'00	9'00
Manzanas	4'00	6'00
Peras (especial)	11'00	13'00
Peras (cts)	4'00	6'00
Naranjas	5'00	3'50
Mandarinas	6'50	3'00
Limonas Berna	12'50	14'50
Limonas (corrientes)	6'00	8'00
Patatas	2'00	2'30
Acelgas	1'75	2'50
Espinacas	5'00	6'00
Repollo	1'50	2'50
Coliflor	3'75	5'00
Cebollas	2'25	3'00
Tomates	6'50	7'75
Lechugas	1'75	2'50
Zanahorias	3'50	4'50

Dichos precios como ya se indica, son "máximos", referidos a la unidad de peso kilo y dentro de cada variedad para las calidades más selectas, no pudiendo sobrepasarlos en ningún caso.

Continúa en vigor cuanto dispone

la Circular número 11/57 de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (Publicada en el "Boletín Oficial del Estado", número 295 de 25 de noviembre de 1957).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Logroño 11 de enero de 1959

El Gobernador Civil,

43

Jefatura de Obras Públicas

57

Junta Provincial Administradora de Vehículos y Maquinaria de Obras Públicas.

ANUNCIO

SEGUNDA SUBASTA

Autorizada esta Jefatura para subastar los vehículos, maquinaria y elementos de los mismos, en desuso, se ha dispuesto sacar en segunda subasta los lotes segundo (2º) y tercero (3º) que quedaron desiertos en la subasta celebrada el día tres de enero de mil novecientos cincuenta y nueve:

Lote nº 2—Coche turismo marca Wauxhall de 17 HP. con dos ruedas de repuesto, por veinticinco mil (25.000) pesetas.

Lote nº. 3—Coche turismo marca Studebaker de 22 HP. con dos ruedas de repuesto, por treinta mil (30.000) pesetas.

La celebración de la subasta se verificará en la Jefatura de Obras Públicas de esta Capital el día veintinueve (29) de enero de 1959 a las doce (12) horas, siendo el importe de los anuncios a prorratio por cuenta de los adjudicatarios.

Cada proposición se referirá a un sólo lote, debiendo presentarse en esta Jefatura de Obras Públicas en sobre cerrado y lacrado, que llevará al exterior el número del lote y el nombre del licitador, admitiéndose únicamente hasta las once (11) horas del día veintiocho (28) de enero de 1959, día anterior a la subasta.

Todas las demás condiciones son exactamente iguales a las publicadas para la primera subasta en el Boletín Oficial de la provincia número 127 de fecha 4 de diciembre de 1958 y en el periódico Nueva Rioja de esta Capital de fecha 2 de diciembre de 1958.

Logroño, 10 de enero de 1959.

El Ingeniero Jefe

44

SERVICIO DE CATASTRO DE LA RIQUEZA RUSTICA

ANUNCIO

47

En cumplimiento de lo ordenado en el art. 84 del Reglamento de 23 de octubre de 1913, se pone en conocimiento de los contribuyentes interesados, que se remite al Ayuntamiento respectivo, para su exposición al público durante ocho días, el Padrón de la Contribución rústica y pecuaria para el año 1959 correspondiente a los términos municipales de:

Estollo, Santa Coloma, Santa Eulalia Bajera y Zarzosa, pudiendo durante dicho plazo ser examinado por los contribuyentes interesados y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

Logroño, 9 de enero de 1959.

34

ANUNCIO

62

Se pone en conocimiento de los contribuyentes por Rústica del término municipal de Badarán que, en la Alcaldía del mismo, estarán expuestas al público durante un plazo de 15 días, contados desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, las relaciones de características de los distintos cultivos y aprovechamientos.

Logroño, a 13 de enero de 1959.

El Ingeniero Jefe Provincial

Victor Labarga

El Delegado de Hacienda

Javier Diago

52

Delegacion de Hacienda

CLASES PASIVAS

42

INDICE NUM. 55

Ordenes de pago de pensión recibidas de la Direccion General de la Deuda y Clases Pasivas:

Antonio Sánchez Urrea, Jubilado Santiago Matute Irazubietta, Retirados Cruces.

Andrés Maño Roa, Retirados Cruces

44

Ministerio de la Gobernación

33

DECRETO de 10 de octubre de 1958 con la corrección de las erratas materiales de copia que se produjeron en el texto publicado en el «Boletín Oficial del Estado del día 10 de los corrientes.

El tratamiento orgánico de la función de los Gobernadores civiles, que con las iniciales denominaciones de Jefes Superiores, Subdelegados de Fomento y Jefes políticos remontaron casi el siglo y medio de su existencia, ha venido haciéndose principalmente dentro del ordenamiento jurídico local y a través de numerosas disposiciones tendientes a regular distintos aspectos específicos de su actuación.

Esta normativa, cuyos períodos de mayor estabilidad corresponden a la vigencia de la Ley de 29 de agosto 1882, Estatuto Provincial de 20 de marzo de 1925 y Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945, con sus consiguientes Leyes articuladas, ha constituido el núcleo principal, del cual, en su caso, se han desgajado las normas especiales requeridas por la singularidad de determinados supuestos. Sin duda hay que colegir que esta trayectoria obedecía a dos circunstancias de índole diversa: la primera, en cuanto que limitada la esfera de acción del Gobernador a la circunscripción provincial, con excepciones sin importancia, era lógico delinear su figura, sus atribuciones, facultades y el carácter de su representación en las Leyes reguladoras del régimen administrativo de las provincias, y la segunda, más bien de carácter residual, por cuanto al no suscitarse la necesidad de elaborar una norma con propia singularidad que regulara autónomamente las funciones de los representantes del Gobierno en las provincias, la trayectoria legislativa aconsejaba utilizar el amparo de las disposiciones locales.

Es cierto que la autoridad que siempre tuvo el Gobernador civil sobre las Instituciones puramente locales, cerca de las cuales ostenta atribuciones importantes, justifica el hecho, en apariencia paradójico, de que las leyes sobre Administración Local vinieran dedicando especiales preceptos al tra-

tamiento orgánico y funcional de su figura. Pero son tantos y tan significativos los deberes y atribuciones que le corresponden, como representante del Gobierno y de la Administración Central — que constituyen la esencia de su peculiar cometido con relación a todas las obras y Servicios públicos del Estado existentes en la provincia —, que también en múltiples disposiciones de diverso grado se han determinado prerrogativas y responsabilidades del Gobernador civil. Mas para perfilar de modo sistemático sus más esenciales matices, dando a la institución una permanente trayectoria de continuidad, atemperada a las exigencias del presente, se requiere que sea en una norma específicamente dedicada al tema donde aquellos conceptos se definan y actualicen, siendo de advertir que ya el Decreto de 24 de junio de 1938 cuyo contenido luego se transcribe, aún dictado en los albores del Movimiento Nacional, preveía la necesidad de acentuar su verdadero carácter y cometido.

El Decreto que se promueve viene así a concretar de modo claro y congruente las funciones de la autoridad que en la provincia es la representación viva del Gobierno, vigorizando su contenido para que más que una Jefatura honorífica sobre los distintos Servicios estatales que en su circunscripción territorial discurren sea titular de facultades efectivas, de modo que ningún órgano delegado, aunque dependiente de un Ministerio, actúe de modo inconveniente o inconexo, sino también, y sin perjuicio de aquella subordinación, como un Servicio a cuya acción no puede ser ajeno el respectivo Gobernador civil, y ello no sólo como derivación lógica inherente a su alta representación, sino cual garantía imprescindible para coordinar las distintas actividades de la Administración Provincial.

No obstante, desde hace tiempo viene observándose, en lenta pero incesante evolución, la progresiva tendencia a excluir de las facultades del Gobernador el ejercicio de determinadas funciones, cuya atribución se confiere a representantes ministeriales.

Esta tendencia sólo puede admitirse en méritos de la exigencia impuesta por la complejidad y mayor suma de actividades técnicas y administrativas asumidas por el Estado que implica la necesidad de que esos cometidos sean conferidos a funcionarios cuya especialización es precisa; pero no se opo-

ne a que, sobre ese conjunto de actividades, el Gobernador actúe en funciones superiores que, dentro del ordenamiento jurídico vigente en cada caso, le permitan adoptar las facultades de decisión que para supuestos importantes le fueren atribuidas; de suspensión, en casos necesarios, y siempre, de impulso y coordinación de la actividad desarrollada por los distintos Organismos o Jefaturas de servicios del Estado en la Provincia.

Para ello se ha tenido en cuenta, y como autorizado precedente, el Decreto de veinticuatro de junio de mil novecientos treinta y ocho, que atribuye a la competencia de los Gobernadores «la dirección y el control en materia de acción política, entendiéndose por ésta las actividades que conciernen a la aplicación positiva de las directrices generales del Gobierno y a la prevención y represión de cuanto las obstruya y desvie, quedando comprendida dentro de los límites de esta competencia la vigilancia de las actividades ciudadanas no atribuidas a otros departamentos, como reuniones, asociaciones y disciplina de costumbres...». Añade el Decreto comentado que tanto los Delegados de orden público (hoy suprimidos) como los de los distintos Departamentos ministeriales estarán subordinados a la autoridad del Gobernador civil, que ostenta la representación del Gobierno en la provincia.

Pues bien, este concepto del Gobernador, tan exacto y certero que no ha perdido su vigente actualidad es el que el presente Decreto recoge y reafirma en sus posibles manifestaciones.

Ciertamente es el Gobernador civil representante y Delegado permanente del Gobierno en la provincia, y en méritos de tal cualidad la primera autoridad de la misma, por lo que su nombramiento se hará en virtud de Decreto de la Jefatura del Estado, previa propuesta del Ministro de la Gobernación y deliberación del Consejo de Ministros (artículo primero y segundo).

Pero ello no quiere decir que el Gobernador sea representante de cada uno de los Departamentos ministeriales, sino del Gobierno en pleno; y, en consecuencia, su labor no es fundamentalmente técnica, como acaece con la de los diversos Delegados de aquéllos, sino predominantemente política y en todo compatible con la que los Delegados ministeriales realizan en su particular cometido.

Mientras tal actividad no rebase los límites de su privativa y siem-

pre respetable competencia, ninguna facultad se atribuye al Gobernador para intervenirla o condicionarla; sólo si ella resulta contraria a las directrices ministeriales o a las circunstancias políticas del momento podrá el Gobernador suspender los acuerdos que los Delegados o representantes de los Departamentos adopten, dando cuenta de tal suspensión al titular del respectivo Ministerio, a cuyo superior parecer la suspensión se supedita.

Tal suspensión de acuerdos será en todo caso, razonada, respondiendo, en último término, del abuso de facultad tan decisiva y trascendente el Gobernador que de ella improcedentemente usare, quien, por los errores que cometiere, puede llegar a perder la confianza del Gobierno, con el subsiguiente cese dado el carácter político de su designación.

Aparte de esta facultad tan imprescindible (que es inherente al sustancial cometido de dirección que en materia de acción política corresponde a la primera Autoridad provincial), debe subrayarse, con igual fundamento, que se atribuye al Gobernador civil una misión de impulso y coordinación de las facultades que corresponden a los distintos Delegados de Servicios, asistido al efecto por la comisión de servicios técnicos, tarea bien necesaria en un Régimen de Administración desconcentrada, conforme a lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, a cuyo amparo puede intensificarse el volumen de la gestión encomendada a los representantes de cada Ministerio y hacerse, por tanto, más indispensable que alguien vele por su actuación armónica en el ámbito de cada provincia.

De la misma Ley citada deriva la previsión de que el Gobernador civil sea depositario de aquellas funciones que por vía de delegación o transferencia le fueren atribuidas dentro de su circunscripción a propuesta del Ministro del Ramo respectivo y por acuerdo del Consejo de Ministros; principio éste que consagra el artículo catorce del Decreto.

Precisando aún más la figura del Gobernador, dentro de las características que le son fundamentales ya señaladas, dedica el Decreto el primero de sus capítulos a exponer lo que llama «Estatuto personal de los Gobernadores civiles», refiriéndose al nodo en que son nombrados, condiciones requeridas para tal nombramiento, toma de posesión, haberes, prerrogativas, incompatibilidades, fuero especial y sustitucio-

nes en caso de ausencia, vacante o enfermedad de los Gobernadores.

Contiene el capítulo segundo la reseña circunstanciada de sus deberes y atribuciones, destacando entre éstas las que les corresponden en orden a la tutela e inspección de las Corporaciones, Asociaciones o Instituciones de carácter público que radiquen en la circunscripción de su mando, así como al impulso, fiscalización y orientación de todos los servicios y delegaciones de los Organos de la Administración Central Civil y a la inspección y vigilancia de cuantas obras civiles se realicen por el Estado y Organismos públicos en su provincia. También se señala expresamente que el Gobernador asume en la provincia de su mando los servicios de orden público y se reseñan aquellos que de modo fundamental son exponentes de tan específica actividad.

Se enumeran asimismo las facultades que a los Gobernadores se confieren en relación con las propiedades especiales; las que ostentan para suscitar cuestiones de competencia o conflictos de jurisdicción y las que tienen en lo que a la Administración Local atañe, las cuales se mantienen inalterables.

Finalmente, es digna de mención una particular circunstancia: la de que el presente Decreto respeta escrupulosamente la jerárquica dependencia de los funcionarios públicos en relación con sus Jefes, conforme a los Reglamentos de sus Cuerpos respectivos, sin que sobre los mismos se atribuya al Gobernador ninguna especie de jefatura: proclama, eso sí, que éste es la primera autoridad de la provincia, declaración lo suficientemente expresiva para deducir de ella la deferencia y respeto con que por todos debe ser tratado, y sólo en esa deferencia y respeto trae causa el precepto que ordena sea puesta en su conocimiento cualquier actuación inspectora que en los distintos Organismos del Estado radicantes en su circunscripción haya de practicarse.

Queda así definida la figura del Gobernador civil, heraldo de la voz del Gobierno, portador de sus directrices y realizador de sus consignas, sin que roce en su complicada labor política y coordinadora aquella otra que, en régimen de aconsejable y bien lograda desconcentración administrativa, los representantes, Delegados o Jefes provinciales de los diversos Departamentos desarrollan.

No trata el Decreto de plantear problema alguno sobre si debe o no subsistir la actual división del territorio nacional en provincias, cuestión ajena por completo a su ámbito y propósito, pero sí ha tenido presente la diversidad de cada una de ellas en extensión y características, y hasta previsto la coyuntura de que el Gobernador deba ejercer sus funciones en circunscripción más extensa.

A tales supuestos obedece la regulación que en su capítulo tres lleva a cabo de las figuras de los Gobernadores generales, Subgobernadores y Delegados del Gobierno cargos todos ellos que traen su fundamental esencia de lo que el Gobernador es, y tienen precedentes reconocidos desde hace muchos años en la legislación patria.

Igualmente, en la tercera de las disposiciones finales vuelve a considerarse, siquiera sea desde el punto de vista contingente en que el Decreto lo contempla, el problema que la diversidad de las provincias puede plantear, autorizándose en ella al Ministro de la Gobernación para que tome las medidas adecuadas al objeto de que la organización de los Gobiernos Civiles se adapte a sus particulares exigencias y peculiaridades.

Las normas que se establecen para regular en principio las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos agotan el contenido del capítulo cuarto del Decreto. Sabido es que ellas nacieron con la reforma local operada en julio de mil novecientos cuarenta y cinco, cual fórmula de ensayo que aspiraba a unir los esfuerzos e intereses del Estado y de la Provincia, razón por la que a estas Comisiones se confían importantes y complejos quehaceres en el artículo dieciséis de la vigente Ley de Presupuestos, cuya norma autoriza al Gobierno para proceder a una reorganización de tales Comisiones.

Con tan laudable intento y saludable signo perduran en el Decreto como el órgano más adecuado para coordinar todos los servicios existentes en cada provincia. Se les asignan funciones deliberantes y asesoras en relación con el Gobernador, que las preside, y entre sus componentes figuran los representantes provinciales de los distintos Departamentos, unidos a otros caracterizados de la Administración Local y Organización Sindical y Política.

La escasa experiencia que del funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos se tiene, y en cuyas primicias la

Adm
que
sus
doso
en P
das,
a fut
reg
de
en la
trata
seis
por c
se c
ment
Po
lar q
funci
dese
cializ
minis
Gobe
en la
finale
la sin
que s
Ot
detal
más
orien
expu
ficati
nada
su ya
fuere
mism
sister
sición
al cor
res d
de no
autor
legisl
Est
que q
modif
sobre
sentó
lio de
cinco
lle pro
tos de
por D
de m
veinti
ciento
nen si
man
dispos
textos
bién a
la disp
Ley de
minis
se igu
quince
cinco
En s
nistro
deliber
tros, v

Administración se debate, ha hecho que el Decreto sea parco al señalar sus cometidos específicos, limitándose a enunciar que funcionarán en Pleno o en Comisiones Delegadas, cuya composición se reserva a futuras disposiciones de carácter reglamentario, así como la índole de las materias que en el Pleno o en las tales Comisiones deban ser tratadas; el artículo cincuenta y seis enumera, no obstante, las que por el momento pueden considerarse como sus atribuciones fundamentales.

Por último, resulta obvio señalar que las delicadas e importantes funciones que los Gobernadores desempeñan requieren una especialización del Cuerpo Técnico-Administrativo del Ministerio de la Gobernación, a la que se provee en la cuarta de las disposiciones finales del Decreto, aprovechado la simple coyuntura de oportunidad que su promulgación depara.

Otras diversas modificaciones de detalle precisarían un comentario más detenido, pero las principales orientaciones del Decreto que han expuestas en este preámbulo justificativo de manera tan clara que nada abona aumentar con demasiada su ya excesiva extensión, como no fuere para señalar que cuanto en el mismo se preceptúa es junto a una sistematizada refundición de disposiciones ya existentes, la aplicación al concepto «atribuciones y deberes de los Gobernadores civiles», de normas que el Gobierno está autorizado a dictar con arreglo a la legislación en vigor.

Estas orientaciones del Decreto, que quedan señaladas, no implican modificación de los principios que sobre los Gobernadores civiles sentó la Ley de Bases de 17 de julio de mil novecientos cuarenta y cinco. Las variaciones que en detalle proyecta sobre diversos preceptos de su texto articulado (aprobado por Decretos de diez de diciembre de mil novecientos cincuenta y veinticuatro de junio de mil novecientos cincuenta y cinco) no suponen sino ampliaciones que legitiman en la cláusula revisoria de la disposición final tercera de ambos textos refundidos, así como también a virtud de lo que establece la disposición final primera de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, haciéndose igualmente aplicación de la de quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación, previa deliberación del Consejo de Ministros, vengo en disponer:

CAPITULO PRIMERO.

Estatuto personal de los Gobernadores civiles

Artículo uno.—El Gobernador civil, representante y Delegado permanente del Gobierno en la provincia, es la primera Autoridad de la misma.

Artículo dos.—El nombramiento y separación de los Gobernadores civiles se hará por Decreto de la Jefatura del Estado, previa propuesta del Ministro de la Gobernación y deliberación del Consejo de Ministros.

Artículo tres.—Para ser nombrado Gobernador civil se requerirá ser español mayor de veinticinco años y reunir alguna de las condiciones siguientes:

a) Ser o haber sido Ministro, Subsecretario, Director General, Gobernador civil, Procurador en Cortes, Jerarquía Nacional del Movimiento, Presidente de Diputación o Alcalde del Municipal o población superior a treinta mil habitantes.

b) Haber prestado servicio de plantilla al Estado, Provincia, Municipio, Movimiento y Corporaciones de Derecho Público en Cuerpos Técnico-administrativo, Facultativos o Especiales durante un tiempo no inferior a cinco años como funcionario permanente.

c) Poseer título profesional que exija grado de Facultad Universitaria o de Escuela Especial Superior o Academia Militar.

Artículo cuatro.—Los Gobernadores civiles, para tomar posesión de su cargo, prestarán juramento ante el Ministro de la Gobernación con arreglo a la siguiente fórmula: «Juro servir fielmente a España, guardar lealtad al Jefe del Estado, obedecer hacer que se cumplan las leyes, como asimismo los Principios fundamentales del Movimiento Nacional; consagrar mis actividades como representante del Gobierno al fomento de los intereses de la provincia y ajustar mi conducta a la dignidad de mi cargo».

Artículo cinco.—A los Gobernadores civiles les será computable, a todos los efectos económicos, administrativos, e incluso a los de derechos pasivos, el tiempo que permanezcan en el ejercicio de sus funciones; continuarán figurando en el Escalafón de la Carrera o Cuerpo a que pertenezcan y con reserva de la plaza que en ellos ocupaban.

Artículo seis.—Los Gobernadores tendrán derecho al sueldo y gastos de representación que en

los Presupuestos Generales del Estado se asignen a los Directores generales, los de Madrid y Barcelona, y los de aquellas provincias que por su destacada importancia señale el Gobierno, quienes percibirán el sueldo y gastos de representación asignados a los Subsecretarios.

Artículo siete.—Los Gobernadores civiles gozarán de las siguientes prerrogativas:

a) Tratamiento de Excelencia.

b) Uso de uniformes e insignias que reglamentariamente deban ostentar sobre aquéllos.

c) Utilización de guión o banderín propio en la provincia de su mando.

d) En los actos en que participen tropas formadas se les rendirán los honores que correspondan al Gobernador Militar de la provincia.

e) Entrada libre en la tribuna de las Cortes.

f) Derecho preferente y requisa de pasaje de clase superior en las líneas de transporte regular dentro de la provincia y hasta Madrid.

Artículo ocho.—Los Gobernadores civiles presidirán en nombre del Gobierno las recepciones públicas y todos los actos a que concurran en la provincia de su mando, con las siguientes excepciones:

a) Aquellos a que asista un representante del Jefe del Estado, o personalmente algún Ministro o Capitán General de la Región, Región Aérea o Departamento marítimo.

b) Los de índole exclusivamente académica o jurisdiccional que se celebren en locales privativamente afectos a la función de que se trate y haya de presidir Autoridad del orden correspondiente con competencia territorial más extensa que la del Gobernador.

c) Los actos relativos al cometido específico de un Ministerio, cuando a ellos asista el Subsecretario o Director general competente.

Artículo nueve.—El cargo de Gobernador civil es incompatible con el ejercicio de cualquier otro de carácter público, civil, militar o eclesiástico y con el de toda clase de profesiones y actividades industriales o mercantiles dentro de la respectiva provincia.

Artículo diez.—Los Gobernadores están sometidos a la jurisdicción del Tribunal Supremo o al fuero del Consejo Supremo de Justicia Militar, por razón de los actos realizados en el ejercicio de

sus funciones o con ocasión de las mismas.

Artículo once.—La sustitución del Gobernador en caso de ausencia o enfermedad será determinada por el mismo y recaerá en el Subgobernador, si existiere, y en otro supuesto, en el Presidente de la Diputación, en el de la Audiencia o en el Secretario general del Gobierno Civil.

En caso de vacante, la interinidad será provista por el Ministro de la Gobernación, recayendo en cualquiera de los cargos a que se refiere el apartado anterior.

Acordado el cese del Gobernador, continuará éste en el ejercicio de sus funciones hasta que el Ministro de la Gobernación designe quién haya de sustituirle, bien interinamente, según lo dispuesto en el párrafo que precede, o de manera definitiva por nuevo nombramiento y subsiguiente posesión, de acuerdo con lo previsto en el artículo segundo de este Decreto.

Artículo doce.—Cuando el Gobernador se ausente de la capital, mas no de la provincia, continuará desempeñando el cargo desde el punto en que se halle, sin perjuicio de que el Secretario general del Gobierno Civil pueda despachar los asuntos de mero trámite y aquellos otros que el Gobernador designe expresamente, comunicándose de modo directo con el Gobierno cuando medien circunstancias de notoria urgencia y gravedad.

CAPITULO SEGUNDO

De los deberes y atribuciones de los Gobernadores.

Artículo trece.—Al Gobernador civil, como Delegado permanente del Gobierno en la provincia, y sin perjuicio de las funciones que como Jefe Provincial del Movimiento ejerza le corresponde:

Primero. La resolución de todas las cuestiones que este Decreto y cualesquiera otras disposiciones le encomienden, así como aquellas que no estén específicamente atribuidas al Delegado de un Departamento ministerial.

Segundo. La tutela e inspección de las Corporaciones, Asociaciones e Instituciones de carácter público.

Tercero. El impulso, fiscalización y orientación, conforme a las directrices de los Ministerios respectivos, de todos los servicios y Delegaciones de los Organos de la Administración Central Civil, de modo especial en las materias a

que se refieren los arts. veinticinco a treinta y cuatro de este Decreto.

Las expresadas entidades y los Delegados o representantes de los Departamentos ministeriales habrán de poner en conocimiento del Gobernador, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su fecha, los acuerdos o resoluciones por ellos adoptados, que el Gobernador civil haya dispuesto con carácter general para determinadas materias o con referencia a un expediente concreto, por la relación que aquellos asuntos tengan para el buen régimen de la política provincial.

Se le notificarán, sin excepción, todas las sanciones que se impongan por infracciones de carácter administrativo.

El Gobernador, en un plazo de tres días podrá suspender aquellos acuerdos y sanciones con expresión de las causas motivadoras de la resolución adoptada dando cuenta de la suspensión a la entidad o funcionario que las adoptó y al Ministro del Ramo competente.

Si el Ministro confirma el acuerdo del Gobernador se entenderá revocado la resolución considerándose tal conformidad tácitamente prestada cuando en el plazo de un mes no manifestase su discrepancia.

En caso de disenso el Ministerio correspondiente dentro del plazo marcado pondrá en conocimiento del Gobernador su disconformidad levantándose la suspensión por éste decretada. De tal acuerdo se dará traslado al Ministro de la Gobernación.

A los efectos previstos en este artículo ninguno de los acuerdos susceptibles de suspensión será ejecutivo hasta que transcurran cinco días contados desde el siguiente al de la fecha de su adopción.

En materia de Administración Local la suspensión de los acuerdos de las Corporaciones llevada a cabo por el Gobernador, se regirá por su legislación privativa.

Artículo catorce.—De conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, además de las funciones que le son encomendadas por el artículo anterior, los Gobernadores civiles tendrán atribuidas dentro de su circunscripción aquellas otras correspondientes a un determinado Departamento ministerial que, a propuesta del Ministro del Ramo respectivo, acuerde asignarle el Consejo de Ministros, cuando entienda que por su naturaleza, importancia o circunstancias especiales que concurren en

el territorio de su mando deban conferirse a dicha autoridad.

Artículo quince.—El Gobernador es el Jefe de todos los Servicios públicos de su provincia y en tal concepto deberá poner en conocimiento del Ministro del Ramo a que aquéllos pertenezcan cualquier anomalía que en los mismos aparezca al objeto de que, con superior autoridad y competencia, adopte las medidas que estime en rigor.

Asimismo podrá promover los expedientes de carácter disciplinario o sancionar en razón a las faltas que considere cometidas en el ejercicio de sus cargos por los funcionarios del Estado, Organismos autónomos y Cuerpos Nacionales de Administración Local, cuyo procedimiento y ulterior resolución se ajustarán a las normas especiales que sean de aplicación a cada uno de ellos.

Artículo dieciséis.—Las funciones de Inspección y vigilancia que corresponden al Gobernador civil conforme al artículo trece, se referirán al desenvolvimiento de todas las obras civiles que se realicen por el Estado y Organismos públicos en el territorio de la provincia.

En su virtud, podrá decretar, en caso de urgente necesidad, la suspensión de aquellas sujetándose su acuerdo y ulterior decisión a los trámites fijados en el artículo que se cita.

Toda actuación inspectora en los distintos Organismos civiles del Estado deberá ser previamente puesta en conocimiento del Gobernador civil de la provincia respectiva.

Los Servicios administrativos provinciales darán cuenta periódica al Gobernador de los créditos que les estén asignados en el transcurso del ejercicio económico, de su inversión y de las incidencias o dificultades que les afectaren.

Artículo diecisiete.—El Gobernador cuidará de aplicar, circular, ejecutar y hacer que se cumplan en la provincia de su mando las disposiciones de general observancia y las que al efecto le comunique el Gobierno.

Artículo dieciocho.—En el ejercicio de sus facultades el Gobernador civil estará asistido por la Diputación y por la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, pudiendo recabar siempre el asesoramiento de la Abogacía del Estado y asimismo el dictamen del Fiscal de la Audiencia en los siguientes casos:

Uno.— Cuando se trate de la infracción de derechos políticos (individuales o sociales) reconocidos por las Leyes.

Dos.— Cuando se infrijan las Le-

yes penales, las de Policía y las de Seguridad y Orden Público

Tres.— Cuando se trate de la interpretación de preceptos referidos a la protección de menores, incapaces, mujeres, desvalidos o desplazados y a los de las Instituciones de Beneficencia o Asistencia Pública.

Artículo diecinueve.— Aparte de las facultades atribuidas a los Gobernadores por las Leyes y disposiciones vigentes, tendrán la de dirigirse a las demás Autoridades civiles del territorio de su mando transmitiendo las quejas que ante ellos se formen y pidiendo con relación a las mismas, y en nombre del Gobierno, las informaciones que estimen precisas.

Cuando se trate de cuestiones judiciales y lo permitan las Leyes procesales, el Gobernador tendrá que dirigirse forzosamente al Fiscal de la Audiencia.

Las comunicaciones relacionadas con el servicio, pidiendo datos a distintos Organismos de la Administración Pública en el orden civil que el Gobernador dirija, se encabedaran con la fórmula siguiente: "De orden del Presidente del Gobierno comunicado a..." o "intereso de...".

Artículo veinte.— El Gobernador elevará al Gobierno cada año una Memoria expresiva de la gestión por el mismo realizada, proponiendo las medidas que, a su juicio puedan contribuir al fomento de los intereses de la provincia y mejoramiento de los Servicios que en ella radiquen.

Artículo veintiuno.— La tramitación de los expedientes en los Gobiernos civiles se ajustará a lo prevenido en la Ley de Procedimiento Administrativo. Se exceptúan los procedimientos declarados especiales.

Los documentos o instancias que se tramiten por conducto del Gobierno Civil se remitirán al Organismo de la Administración que proceda, directamente, y dentro de las veinticuatro horas siguientes al día de su presentación.

Cuando haya de informarlos el Gobernador civil, el plazo para evacuar tal trámite será de diez días, salvo que disposición expresa permita otro mayor, que en ningún caso excederá de dos meses.

Artículo veintidós.— Las sanciones que pueden imponer los Gobernadores civiles lo serán mediante expediente, y si consistieran en multas, deberán abonarse en papel de pagos al Estado y no podrán exceder del límite que la Ley de Orden Público u otras disposiciones especiales autorizan en cada caso.

Para la graduación de multas se tendrá en cuenta no solo la gravedad

y trascendencia del hecho realizado, sino también los antecedentes y conducta del infractor, y muy especialmente su solvencia económica.

Al imponer la multa se fijará el plazo dentro del cual habrá de hacerse efectiva, que no será inferior a tres días hábiles, a partir de la notificación pudiendo acordarse igualmente el pago fraccionado en los plazos que se indiquen.

En caso de falta de pago de las multas una vez firmada la resolución que las impuso, el Gobernador podrá oficiar al Juzgado competente, con copia auténtica de la resolución para que proceda a su exacción por vía de apremio, o bien el propio Gobernador decretará el arresto sustitutivo de la multa hasta el máximo que autorice la Ley de Orden Público, el Decreto Ley de cuatro de agosto de mil novecientos cincuenta y dos y demás disposiciones vigentes.

La imposición de arresto sustitutivo por falta de pago de multas acordadas por Autoridades administrativas inferiores corresponderá al Gobernador civil, con el límite señalado en el párrafo anterior.

Contra la imposición de las sanciones y de las multas a que se refiere este artículo procederán, en su caso, y hecha cuenta de la naturaleza de la infracción, los recursos prevenidos en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo veintitrés.— Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Gobernador civil asumirá en la provincia de su mando los Servicios de Orden Público y de Policía, por espondiéndole de modo especial las siguientes atribuciones:

a) Mantener el orden público y proteger las personas y sus bienes, sancionando los actos que vengán en detrimento de aquél o atenten contra la moral o la disciplina de las costumbres, así como también las faltas en que por hechos socialmente reprobables incurriese cualquier persona sin perjuicio de la competencia de los Tribunales o Autoridades de otra jurisdicción.

b) Ejercer la Jefatura de los Servicios de Orden Público, Policía y demás fuerzas armadas pertenecientes a los Cuerpos e Institutos destinados a mantener el orden y seguridad. Si dependen de la provincia o municipio, condicionará a su aprobación el régimen orgánico y de disciplina de los mismos, si no precisare la del Gobierno, y coordinará estos Servicios con los Cuerpos e Institutos del Estado. Todas estas atribuciones se entenderán sin perjuicio de las reservadas en Madrid a la

Dirección General de Seguridad por la Legislación vigente.

c) Dirigir las funciones de policía en materia de actos públicos reuniones y asociaciones, y hacer cumplir el régimen establecido sobre suscripciones, cuestaciones, festivales benéficos y otros de análoga finalidad.

d) Ejercer idénticas funciones en materia de espectáculo y prohibir los contrarios a la moral, al orden y a las buenas costumbres, así como suspenderlos por causa de orden público, epidemia o luto nacional.

Artículo veinticuatro.— Las sanciones que el Gobernador imponga en aplicación del artículo anterior, quedarán excluidas de la Ley de Procedimiento y se tramitarán con arreglo a las normas peculiares en la materia de orden público a que se refieren.

Artículo veinticinco.— Los Gobernadores civiles tendrán a su cargo velar por el exacto cumplimiento de las disposiciones sanitarias, adoptando en casos urgentes y bajo su responsabilidad las medidas que estimen necesarias para preservar la salud pública de epidemias enfermedades contagiosas, tóxicos de infección y otros riesgos análogos, dando cuenta inmediata al Ministerio de la Gobernación. En estos casos reclamarán el asesoramiento del Jefe Provincial de Sanidad.

Artículo veintiseis.— Los Gobernadores civiles fomentarán las medidas tendientes al incremento u ordenación del turismo en su provincia, coordinando las iniciativas y la acción de las entidades que tengan atribuida esta misión. Inspeccionarán, asimismo, los lugares, establecimientos, monumentos, y parajes de interés turístico; prohibirán las construcciones de uevas, chabolas y barracas, disponiendo lo conveniente para su inmediata demolición, y autorizarán conforme a las normas de los Ministerios competentes, las condiciones y situación de los campamentos al aire libre.

Artículo veintisiete.— Los Gobernadores cuidarán cuanto redunde en la mejora e intensificación de cultivos, ampliación de superficies adjudicadas a ellos, fomento del regadío, la colonización y concentración parcelaria, conservación de frutos y sus especies, vigilancia y sanidad del ganado y conservación de vías pecuarias, a cuya finalidad estimularán los Servicios y actividades relacionadas con estas materias.

Establecerán de acuerdo con las normas vigentes las condiciones adecuadas para el ejercicio de la caza y la pesca, impidiendo la extinción de las especies que no sean declaradas

dañinas, y ejercerán la debida vigilancia para el fomento y conservación de esa riqueza.

Fomentarán la repoolación forestal estimulando las actividades de los particulares y entidades publicas encaminadas a la conservación y mejoramiento de los montes, imponiendo las sanciones que procedan por los daños causados o actos cometidos con riesgo de causarlos.

Artículo veintiocho.— El Gobernador ejercitará cuantas facultades y poderes le confiere la legislación vigente para fomentar la construcción de viviendas destinadas a los sectores de población de economía modesta y, en general, con relación a los Organismos oficiales que tienen encomendada esta finalidad.

Le corresponderá al Gobernador el conceder o denegar la autorización para proceder a la demolición de edificios destinados a viviendas disponer el desalojo de los inmuebles declarados en ruina y el alquiler obligatorio de los que fueren susceptibles de ser ocupados, instando, en su caso, del Ministerio fiscal el desahucio por causa de utilidad social.

El Gobernador inspeccionará los Organismos y Servicios oficiales sindicales encargados de proyectar construir o explotar viviendas.

Dentro del límite señalado por la Ley, el Gobernador es competente para imponer sanciones derivadas de infracciones urbanísticas o de las reguladoras del régimen de viviendas cuya construcción haya sido realizada de acuerdo con el sistema de protección del Estado, todo ello sin perjuicio de los recursos que procedan ante el Ministerio de la Vivienda.

Artículo veintinueve.— Corresponderá con carácter exclusivo al Gobernador civil la imposición de sanciones derivadas de infracciones de circulación fuera de las poblaciones, bien sea a propuesta de los Servicios de los Agentes de la Policía de Tráfico o a iniciativa de otros Servicios.

Artículo treinta.— Los Gobernadores civiles impulsarán la enseñanza primaria, a cuyo fin cuidarán de la construcción, conservación y reparación de Escuelas y viviendas para los Maestros y de la asistencia de los niños comprendidos en la edad escolar.

Las faltas de asistencia escolar serán sancionadas por los Gobernadores civiles o por los Alcaldes, como delegados de aquellos, con multas que serán efectivas con cargo a **gulesen** tengan confiada la patria potestad, guarda, tutela o dependencia de los menores. Serán proporcionadas al número de inasistencias y po-

rán ser extendidas a prestaciones personales complementarias que estén relacionadas con los servicios escolares.

Los Directores, Decanos, Rectores o Encargados de Centros docentes, públicos o privados, en la provincia, informarán periódicamente al Gobernador de la situación en ellos existente en cuanto pueda trascender del orden interno de dichos establecimientos.

Artículo treinta y uno.— Los Gobernadores civiles, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden a los Ayuntamientos, adoptarán las medidas y dictarán las instrucciones necesarias para aplicar en la provincia las normas de carácter general que aseguren el abastecimiento de los artículos de consumo de primera necesidad, y velarán por el mantenimiento y normalidad de los precios, imponiendo a tal fin las multas que autorice la legislación especial sobre la materia o las que este Decreto señale y Turismo.

En casos excepcionales podrá disponer, con el asesoramiento y la colaboración de los correspondientes Servicios, la intervención de los productos mencionados, así como la de los medios de transporte necesarios para su distribución.

Las facultades atribuidas a los Gobernadores en relación con las subsistencias, afectarán a las regulaciones y actividades ejercidas por cualquier Organismo de carácter provincial, local o sindical.

Artículo treinta y dos.— El Gobernador civil velará, dentro de cada provincia para que las actividades relacionadas con festivales, espectáculos, actos públicos, culturales y similares se realicen conforme a las normas e instrucciones que regulan tales materias, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Información y Turismo.

Los órganos provinciales a los que estén encomendados los Servicios que anteriormente se expresan, cuidarán de dar cuenta al Gobernador civil de cualquier iniciativa o medida que sin ser de mero trámite, tenga relación con ellos, al objeto de prevenir con la mayor antelación las incidencias que de los mismos pudiera derivarse.

Los Gobernadores civiles podrán imponer las sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto en los artículos veintidos y veintitres como consecuencia de infracciones cometidas en cualquiera de las actividades enumeradas anteriormente.

Artículo treinta y tres.— Corresponderá a los Gobernadores civiles el ejercicio de las facultades que en

materia de propiedades especiales les confiere la legislación vigente con la finalidad de protegerlas, evitando los abusos y encaminando su disfrute a los fines sociales, culturales y económicos a que están destinadas.

Asimismo establecerán las servidumbres de aguas; intervendrán en las concesiones de aprovechamiento de las de carácter público; acordarán la requisa de las particulares que, mediante la consiguiente indemnización, sean precisas para el abastecimiento de poblaciones; aseguraran su sanidad y pureza, y concederán los permisos para investigación y alumbramiento de las subterráneas, todo ello de acuerdo con la Ley que las regula.

Corresponderá también al Gobernador la clausura o modificación de industrias que sean peligrosas; establecer servidumbres forzosas para el paso de corriente eléctrica; imponer sanciones a las empresas por disminución apreciable de voltaje e interrupción de servicio, así como las que fueren consecuencia de infracciones reglamentarias sobre instalación, verificación y suministro de energía eléctrica y gas, y, en general, adoptar reglamentarias sobre instalación, cualquiera el normal disfrute de estos servicios, y siempre de acuerdo con lo previsto en la vigente legislación.

Artículo treinta y cuatro.— Corresponderá al Gobernador civil ejercer el protectorado de todas las Instituciones benéficas privadas existentes en la provincia, tutelando los derechos de patronazgo y adoptando las determinaciones que la legislación de Beneficencia señale.

Artículo treinta y cinco.— El Gobernador promoverá funciones de competencia a los Jueces y Tribunales de todos los órdenes, según la legislación vigente, y suscitará conflictos de atribuciones a otras Autoridades administrativas.

También instruirá por sí mismo o por sus delegados las primeras diligencias con ocasión de delitos o faltas descubiertas por su Autoridad o por sus Agentes y, con envío de las diligencias practicadas dentro de las setenta y dos horas siguientes a la detención, entregará los detenidos al Juez o Tribunal competente.

Al Gobernador civil corresponderá con carácter general la representación ordinaria del Estado como titular de la potestad expropiatoria en los expedientes de esta clase, salvo en los casos en que la Ley, norma especial con jerarquía de Decreto o el Reglamento de veintiséis de abril de mil novecientos cincuenta y siete, hayan

13 de
estab
ridad
Ar
berna
traci
Pri
Presi
vinci
Técni
nes,
ter e
Pri
los S
Corpe
que s
y eje
demá
Ter
y acu
prece
gimen
Cua
ciplin
tado
minist
ies, co
Leyes
Qui
que su
poraci
otras
cipio
Sex
bleas
de en
provin
Sept
ban p
tario.
Artic
bernac
las ses
interve
Com
lo cuan
tir a la
de, en
con es
en cuy
to y l
respon
Los
los acto
tamen
o final
de cor
solemni
Gobern
dores
Artic
excepci
via deli
nistros,
civiles
el terri
parte d
En el

establecido la competencia de Autoridad distinta.

Artículo treinta y seis.— Al Gobernador, como Jefe de la Administración Provincial, le corresponde:

Primero.— Presidir con voto, como Presidente nato, la Diputación Provincial y la Comisión de Servicios Técnicos, cuando asista a sus sesiones, pudiendo convocarlas con carácter extraordinario.

Primero.— Presidir con voto, como los Servicios de las Autoridades y Corporaciones locales, cuidando de que sus actos y acuerdos se adopten y ejecuten conforme a las Leyes y demás disposiciones Generales.

Tercero.— Suspender dichos actos y acuerdos cuando proceda, según los preceptos de la Ley vigente de Régimen Local.

Cuarto.— Ejercer las funciones disciplinarias y protectoras que al Estado corresponden respecto a la Administración de las Entidades locales, con arreglo a lo previsto en las Leyes.

Quinto.— Resolver las competencias que surjan entre Autoridades o Corporaciones locales y entre unas y otras que no sean del mismo Municipio pero sí de igual provincia.

Sexto.— Autorizar reuniones asambleas o congresos de representantes de entidades locales en el ámbito provincial.

Séptimo.— Cuantas otras le incumban por precepto legal o reglamentario.

Artículo treinta y siete.— Los Gobernadores civiles no podrán presidir las sesiones de los Ayuntamientos ni intervenir en sus deliberaciones.

Como excepción, solo podrán hacerlo cuando consideren convenientemente asistir a la toma de posesión del Alcalde, en la sesión extraordinaria que con ese exclusivo fin se convoque, en cuyo caso le recibirá el juramento y le entregará las insignias correspondientes a su Autoridad.

Los Gobernadores podrán presidir los actos que se celebren en los Ayuntamientos que tengan como motivo o finalidad exclusiva la celebración de conmemoraciones nacionales o solemnidades especiales.

CAPITULO TERCERO

Gobernadores generales, Subgobernadores y Delegados del Gobierno

Artículo treinta y ocho.— En casos excepcionales, el Jefe del Estado, previa deliberación del Consejo de Ministros, podrá nombrar Gobernadores civiles generales, con jurisdicción en el territorio de varias provincias o parte de ellas.

En el Decreto de nombramiento

se señalarán sus atribuciones, las circunstancias relativas al carácter de su designación, el ámbito que comprende la jurisdicción de su mando y su régimen jurídico.

En todo caso, los Gobernadores civiles de las provincias incluidas en la jurisdicción del Gobernador general estarán jerárquicamente sometidos a éste.

Artículo treinta y nueve.— El Gobernador general se reunirá periódicamente y en régimen de actuación colegiada con los Gobernadores civiles de las provincias de su jurisdicción para coordinar la política y la acción administrativa del Gobierno General.

A dichas reuniones asistirán los miembros de las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos que al efecto sean convocados.

Artículo cuarenta.— El nombramiento de Gobernadores civiles generales podrá hacerse también por motivos de orden público, de acuerdo con la legislación especial de la materia, en cuyo caso se limitarán sus atribuciones a este cometido y en tanto subsistan las causas que originaron su designación.

Artículo cuarenta y uno.— El Gobierno podrá designar, para las provincias en que lo creyere necesario, Subgobernadores civiles, que dependerán de los respectivos Gobernadores y que tendrán a su cargo las funciones que aquél le señale o éstos les deleguen.

El nombramiento de Subgobernadores se hará por Decreto y recaerá en quienes ostenten algunas de las condiciones previstas en el artículo tercero.

Los haberes de los Subgobernadores serán los que correspondan a los Jefes Superiores de Administración Civil, reconociéndoles asimismo gastos de representación iguales al sueldo disfrute gratuito de casa habitación y tratamiento de ilustrísima.

Artículo cuarenta y dos.— En cada isla de las provincias insulares, salvo en la capital, existirá un Delegado del Gobierno, subordinado al Gobernador civil de la respectiva provincia, que será nombrado por el Ministro de la Gobernación, previa propuesta de aquél.

Tendrán haberes equivalentes a los Jefes de Administración de primera y los demás derechos que en el párrafo tres del artículo anterior se contienen a los Subgobernadores.

Artículo cuarenta y tres.— Los Delegados del Gobierno darán cuenta al Gobernador de quien dependen de las medidas que adopten y de los hechos revelantes que en su jurisdic-

ción se produzcan, y propondrán cuanto se refiere al momento de los intereses morales y materiales de la isla.

Todas las disposiciones y resoluciones de los Delegados del Gobierno podrán ser modificadas o revocadas por los Gobernadores, salvo aquellas que, por razón de Ley o de la materia a que se refieran deban serlo por otras Autoridades, siempre dentro de los límites establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo cuarenta y cuatro.— Los Delegados del Gobierno dictarán las disposiciones que consideren oportunas, dentro del ámbito de su autoridad, para el cumplimiento de las ordenes superiores y para la buena administración y gobierno de los pueblos.

Comunicarán a quien corresponda las Leyes, Ordenes, Decretos y disposiciones que estimen pertinentes o que se les trasladen por el Gobernador de la provincia, disponiendo en otro caso, lo conveniente para su ejecución.

Artículo cuarenta y cinco.— Los Delegados del Gobierno sólo podrán comunicar directamente con las autoridades de la Administración Central cuando, por razón del servicio estén autorizados a hacerlo por el Gobernador o en casos de extrema urgencia, en que deberán dar cuenta inmediatamente a este.

Se abstendrán de ejecutar acto alguno por el que puedan considerarse invalidadas las facultades que correspondan a las autoridades locales, aunque podrán suspender los acuerdos que las Corporaciones adopten en los casos señalados en la Ley de Régimen Local, dando cuenta inmediata al Gobernador civil.

Artículo cuarenta y seis.— Los Delegados del Gobierno podrán presidir cuantos Organismos y Juntas de carácter estatal existan en la isla, así como suspender en casos de manifiesta gravedad, cualquier decisión que se adopte por aquellos, dando inmediata cuenta al Gobernador civil.

Artículo cuarenta y siete.— Los Delegados del Gobierno tendrán, en relación con el orden público las siguientes facultades:

Primera.— Mantener y proteger a las personas y propiedades, a cuyo efecto podrán reclamar el apoyo de la fuerza armada que necesite.

Segunda.— Reprimir los actos contrarios a la religión, a la moral o a la decencia pública, las faltas de obediencia o de respeto a su autoridad y las que cometan los funcionarios y Corporaciones dependientes del

Estado en el ejercicio de sus cargos.

Tercera. — Adoptar las medidas que estén al alcance de su autoridad para evitar la perpetración de los delitos y procurar el descubrimiento y aprehensión de los autores de cualquier hecho criminal.

Cuarta. — Insistir por sí mismos o por sus Delegados las primeras diligencias en aquellos delitos cuyo descubrimiento se deba a sus disposiciones o Agentes, entregando en el término de tres días al Tribunal competente los detenidos con las diligencias que hubiere practicado.

Quinta. — Acudir sin demora donde parte al Gobernador de la provincia, a cualquier punto de su demarcación en que ocurran desórdenes o se halle amenazada la tranquilidad pública o se produzcan graves o extraordinarios.

Artículo cuarenta y ocho. — Los Delegados del Gobierno cuidarán cuanto se refiere a la sanidad en la forma prevenida por las Leyes y Decretos, y dictarán en casos previstos y urgentes de epidemia o enfermedad contagiosa o calamidades públicas, cuantas providencias sean necesarias, dando cuenta inmediata al Gobernador.

Artículo cuarenta y nueve. — Los Delegados del Gobierno estarán autorizados para la imposición de multas por hechos relacionados con el orden público, infracción de normas generales o gubernativas, o faltas de respeto a su autoridad. La cuantía de ellas no podrá exceder del límite que la Ley de Orden público u otras disposiciones especiales autoricen en cada caso.

El arresto sustitutorio se acomodará a los términos generales establecidos en el artículo veintidos.

De la imposición de las expresadas multas podrá alzarse el sancionado ante el Gobernador de la provincia, sin perjuicio del recurso que proceda contra la resolución de este último.

Artículo cincuenta. — Los Delegados del Gobierno tendrán derecho preferente, por razón del servicio a disponer de pasaje de clase superior en las líneas marítimas o aéreas de navegación, a cuyo efecto podrán disponer y ordenar, para acudir a la capital de la provincia, la requisa de los billetes que sean precisos para cumplir su cometido.

Artículo cincuenta y uno. — Los Gobernadores civiles podrán nombrar para zonas y casos determinados dentro del territorio de sus respectivas jurisdicciones, Delegados de su autoridad que los representen en el mantenimiento de orden público.

También podrá nombrarse con tal

carácter para funciones informativas o de esclarecimiento de hechos que por su importancia requieran esta clase de designaciones.

Del nombramiento de estos Delegados se dará conocimiento al Ministerio de la Gobernación, siéndoles de abono, por cuenta del Estado, las dietas y gastos de viaje que se causen en el cumplimiento de su misión.

CAPITULO CUARTO

De las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos

Artículo cincuenta y dos. — Como órgano deliberante de colaboración inmediata con el Gobernador civil, la Comisión Provincial de Servicios Técnicos de la Diputación tendrán la finalidad de coordinar la actividad desconcentrada que dentro de la provincia realice la Administración Central, sin perjuicio de aquellos otros objetivos que le atribuye la legislación vigente.

Artículo cincuenta y tres. — La Comisión Provincial de Servicios Técnicos será presidida por el Gobernador civil. La vicepresidencia corresponderá al Presidente de la Diputación. Sus miembros serán: el Alcalde de la capital, un representante del Consejo Provincial del Movimiento, el Procurador en Cortes representante de los Municipios, el Jefe Provincial de Sanidad, el representante de cada Ministerio en la provincia, El Abogado del Estado Jefe, el Delegado Provincial de Sindicatos y el Jefe del Servicio Provincial de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales. Actuará como Secretario el de la Diputación Provincial cuando se ejerzan funciones señaladas en el apartado c) del artículo cincuenta y seis, o las que correspondan por la Ley de Régimen Local; en los restantes casos lo será el del Gobierno Civil.

De la Comisión Provincial de Servicios Técnicos formarán también parte los siguientes Vocales: en la de Alava, el Diputado Presidente de la Comunidad Jurídico Administrativa, el Interventor general de la provincia, el Letrado Jefe de Hacienda, los Ingenieros Directores de Carreteras, Montes y Agricultura; el Arquitecto Provincial, y el Ingeniero Industrial al servicio de la Diputación. Y de la de Navarra, el Diputado Foral Presidente de la Comisión Permanente y de Régimen Municipal del Consejo Foral Administrativos de Navarra, Diputado Foral Presidente de la Junta Superior de Educación de Navarra, el Contador de Fondos Provinciales los Directores de Hacen-

da, de Arquitectura y el de Administración Municipal de la Diputación; los Ingenieros Directores de Caminos, de Montes y de Agricultura de la Diputación, y el Ingeniero industrial a su servicio.

Artículo cincuenta y cuatro. — La Comisión Provincial de Servicios Técnicos funcionará en Pleno o en Comisiones Delegadas.

El número y la composición de estas Comisiones se determinará reglamentariamente adscribiéndose a las mismas las personas que, no formando parte del Pleno, tengan relación con los cometidos atribuidos a cada una de ellas en razón del cargo que desempeñen.

Artículo cincuenta y cinco. — El Gobernador civil podrá requerir la cooperación o asistencia a la Comisión Provincial de Servicios Técnicos de cualquier persona cuyo parecer estime oportuno oír por razón de la materia objeto de deliberación.

Cuando se trate de cuestiones de orientación técnica deberán requerirse previamente los dictámenes escritos de los órganos a los que corresponda emitirlos por razón de la materia.

Artículo cincuenta y seis. — Corresponden a la Comisión Provincial de Servicios Técnicos las atribuciones siguientes:

a) Deliberar o informar sobre cuantas cuestiones le someta el Gobernador civil.

b) Dictaminar en aquellos asuntos o materias que, no siendo de las que se mencionan en el artículo cincuenta y siete, aun estando atribuidas por la legislación vigente a un determinado Servicio o Delegación ministerial, por su importancia o trascendencia se considere oportuno oír su parecer, a propuesta del Jefe del expresado Servicio o Delegación, o por acuerdo del Gobernador civil.

c) Administrar los fondos provinciales de inversión y que el Estado u Organismos paraestatales, dediquen para subvencionar obras o servicios de interés local, de acuerdo con la legislación aplicable a la provincia respectiva y con las directrices que se señalen.

d) Asumir el cometido de todas las Juntas, Comisiones o cualquier otro Organismo colegiado de carácter estatal que exista en la provincia.

e) Desempeñar las funciones que se les encomienden por acuerdo del Gobierno.

Artículo cincuenta y siete. — Quedarán fuera de la competencia de la Comisión Provincial de Servi-

13 de
 dos T
 rias:
 a)
 b)
 c)
 d)
 e)
 Art
 deter
 caract
 compre
 y seis
 resuelto
 sión P
 sus Co
 En su
 cualqui
 nérican
 cial de
 ser eje
 gadá c
 de dud
 Govern
 DISI
 Prime
 dispues
 y seis,
 tas toda
 cualqui
 carácter
 cial, cu
 das por
 Servici
 El Co
 creto, u
 cia del
 ceptos
 ción de
 fiere el
 presada
 Segun
 cido en
 tnuarán
 organiza
 a) Las
 obras d
 b) Las
 adminis
 camente
 da y pa
 Goberna
 proponer
 e partir
 sante De
 Pleno o
 de las
 Servicios
 c) Aqu
 el Gobie
 mantener
 Tercera
 nación d
 para la
 Civiles,
 las exig
 cada pro
 Cuarta
 Adminis
 Governac
 goria esp

dos Técnicos las siguientes materias:

- a) Orden público.
- b) Fiscales o tributarias.
- c) Jurisdiccionales.
- d) Militares; y
- e) Medios de información.

Artículo cincuenta y ocho.—Se determinarán por disposiciones de carácter reglamentario las materias comprendidas en el art.º cincuenta y seis que deban ser conocidas o resueltas por el Pleno de la Comisión Provincial de Servicios o por sus Comisiones delegadas.

En su defecto se entenderá que cualquier atribución conferida genéricamente a la Comisión Provincial de Servicios Técnicos puede ser ejercida por la Comisión delegada correspondiente, y, en caso de duda, por la que determine el Gobernador.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. De conformidad a lo dispuesto en el artículo cincuenta y seis, apartado d), quedan disueltas todas las Juntas, Comisiones y cualquier Organismo colegiado de carácter estatal y ámbito provincial, cuyas funciones serán asumidas por la Comisión Provincial de Servicios Técnicos.

El Consejo de Ministros, por Decreto, a propuesta de la Presidencia del Gobierno, dictará los preceptos necesarios para la integración de las entidades a que se refiere el apartado anterior en la expresada Comisión Provincial.

Segunda. No obstante lo establecido en la disposición anterior continuarán funcionando con su actual organización:

- a) Las Juntas Administrativas de Obras de Puertos y las de Deltas.
- b) Las Corporaciones o Entidades administrativas constituidas específicamente en una localidad determinada y para fines concretos, si bien los Gobiernos respectivos deberán proponer en el término de seis meses a partir de la publicación del presente Decreto, su incorporación al Pleno o a alguna Comisión delegada de las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos.
- c) Aquellos Organismos en los que el Gobierno estime oportuno deben mantener su organización específica.

Tercera.— El Ministro de la Gobernación dictará las normas adecuadas para la organización de los Gobiernos Civiles, de modo que se adapten a las exigencias y peculiaridades de cada provincia.

Cuarta.— En el Cuerpo Técnico Administrativo del Ministerio de la Gobernación se establece una categoría especial de Diplomados, cuya

condición se obtendrá previo el oportuno curso de perfeccionamiento.

Deberán pertenecer a ella los funcionarios entre quienes se provean los destinos de Jefes de Sección del Ministerio y Gobiernos Civiles, así como también los Secretarios y Oficiales Mayores de los mismos.

Los funcionarios que desempeñen tales destinos gozarán de una remuneración complementaria igual a la diferencia entre la categoría escalafonal del funcionario y la que presupuestariamente se asigne a dichos cargos, teniendo la consideración de haber a todos los efectos administrativos y económicos.

El Ministerio de la Gobernación dictará las normas necesarias para la convocatoria de los cursos y régimen orgánico de tal categoría de funcionarios.

Quinta.— El Gobierno dictará las normas de desarrollo reglamentario que requiera la aplicación del presente Decreto y en todo caso, las que se precisen para el ejercicio con unidad de criterio de las facultades que regula el número segundo del artículo trece.

Sexta.— El Ministerio de Hacienda propondrá al Gobierno, y éste someterá a las Cortes, las disposiciones necesarias para la efectividad económica de lo previsto en el presente Decreto.

Séptima.— El Ministro de la Gobernación propondrá al Consejo de Ministros, o adaptará, si fuesen de su exclusiva competencia, las normas que se requieran para el desarrollo de las consignadas en este Decreto y cumplimiento de lo previsto en la disposición final tercera de la Ley refundida de Régimen Local.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados cuantos preceptos se opongan a lo prevenido en este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación
Camilo Alonso Vega

Administración de Justicia

REQUISITORIA

40
Julio Fernando Rodríguez Rodríguez de 70 años natural de Vigo hijo

de Amancio y de Jesusa domiciliado últimamente en Logroño comparecerá ante el Juzgado de Instrucción de Logroño dentro del término de diez días para constituirse en prisión provisional por la causa número 4 de 1959 que se le sigue en este Juzgado por el delito de estafa apercibiéndole que de no comparecer le parará el perjuicio consiguiente e incurrirá en las demás responsabilidades que determina la Ley.

Por tanto ruego a todas las autoridades y ordeno a la Policía Judicial procedan a la busca y captura de dicho procesado y de ser habido sea puesto a disposición de este Juzgado.

Dado en Logroño a 7 de enero de mil novecientos cincuenta y nueve

El Juez de Instrucción

35

REQUISITORIA

41

Antonio Vila Miró de 42 años, natural de Barcelona hijo de Eduardo y de Antonia domiciliado últimamente en Barcelona comparecerá ante el Juzgado de Instrucción de Logroño dentro del término de diez días para constituirse en prisión provisional por la causa número 5 de 1959 que se sigue en este Juzgado por el delito de estafa apercibiéndole que de no comparecer le parará el perjuicio consiguiente e incurrirá en las demás responsabilidades que determina la Ley.

Por tanto ruego a todas las autoridades y ordeno a la Policía Judicial procedan a la busca y captura de dicho procesado y de ser habido sea puesto a disposición de este Juzgado.

Dado en Logroño a 7 de enero de mil novecientos cincuenta y nueve.

El Juez de Instrucción

36

EDICTO

49

Por virtud del presente Edicto se requiere al penado Francisco López Cruz de 36 años hijo de José y de Juaquina natural de Almería y vecino de Madrid; al objeto de notificarle la multa de mil pesetas a que ha sido condenado por la causa 230 de 1955 por el delito de injurias graves y el arresto sustitutorio de un día por cada cincuenta pesetas insatisfechas.

Así lo tiene acordado el Señor don Francisco López Quintana, Magistrado Juez de Instrucción de Logroño

y su Partido, en certificación de sentencia recaída en la causa mencionada.

Logroño 23 de diciembre de 1958

El Secretario

48

REQUISITORIA

50

Félix Fernández Heredia, de 19 años, rijo de Félix y Celerina natural y vecino de Jübera. Logroño, comparecerá ante la Audiencia Provincial de Logroño a fin de notificarle los beneficios de indulto a su favor decretados en la causa número 54 de 1957.

Por tanto ruego a todas las autoridades y ordeno a la Policía Judicial se proceda a la busca de dicho individuo y de ser habido se le ordene la comparecencia ante la Audiencia Provincial de esta Capital.

Logroño a 31 de diciembre de 1958

El Magistrado Juez

47

Ayuntamiento de Calahorra

EDICTO

52

Aprobado en principio por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de mi Presidencia un expediente de transferencia de créditos dentro del Presupuesto Ordinario queda expuesto al público en esta Secretaría Municipal por término de quince días y horas hábiles de oficina a efectos de reclamaciones con arreglo a lo dispuesto en el número 3 del artículo 69 de la vigente Ley de Régimen Local.

Calahorra, a 29 de diciembre de 1958.

El Alcalde

41

LOS ORIGINALES DEBEN IR ESCRITOS SOLAMENTE POR UNA CARA

CARA

ANUNCIOS OFICIALES

ANUNCIO

56

En virtud de acuerdo adoptado por este Ayuntamiento y una vez autorizados por el Distrito Forestal de esta provincia, se anuncian las subastas de aprovechamientos forestales que después se dirán cuyo acto tendrá lugar el día 31 del actual, dando comienzo el mismo a las once de la mañana con un intervalo de quince minutos para cada subasta:

Monte «Dehesa Lastornal»

✓ Lote n.º 1.—31'017 m-3 de madera y 20 m-3 de leña de haya procedente de árboles desarraigados por el viento, puestos en pie de cargue, bajo el precio base 33.000 pesetas y siendo el precio índice de 41.250 pesetas. Clasificado en el Grupo 1º para C.P de las clases A, B, ó C. Indemnizaciones 223'10 pesetas.

✓ Lote n.º 2.—325 m-3 de leña gruesa y 165 m-3 de ramaje de roble y maleza. Este aprovechamiento lleva un descuento del 20% del precio que sirvió para la 1ª y 2ª subasta, siendo el precio base actual 37.760 pesetas y el índice 47.200 pesetas; indemnizaciones 1.210'25 pesetas; Grupo 3º para C. P. de la clase D.

El lote 1º aumenta en su precio los trabajos de corta y arrastre, que serán satisfechos por el adjudicatario en el momento de notificársele la adjudicación definitiva, y los mismos ascienden a la cantidad de 9.463 pts.

Los pliegos podrán presentarse durante las horas de oficina, hasta la fecha y hora de la subasta en la Secretaría de este Ayuntamiento, en sobres cerrados, reintegrados con pólizas de 6 pesetas y para tomar parte en las subastas es preciso que el licitador haya hecho efectivo el ingreso del 2 por ciento de la tasación en concepto de fianza provisional.

Los pliegos de condiciones facultativo y económico-administrativo se hallan de manifiesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento.

Lumbrera de Cameros, a 9 de enero de 1959.

El Alcalde

43

ANUNCIO

48

El día veintisiete del actual y hora de las doce de su mañana se celebrarán las siguientes subastas forestales en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial con arreglo a las disposiciones vigentes y Orden del Ministerio de Agricultura de 4 de octubre de 1952.

✓ Primera.— Once hayas desarraigadas por el viento con 76 metros cúbico de 6520 pesetas, índice de 8150 bicos de madera y 12 de leña, en preyo de indemnizaciones 146'50 pesetas, aprovechamiento grupo primero.

✓ Segunda.— 210 Has. de pastos para 1100 lanares y 50 cabrios en el precio base de 9800 pesetas, índice de 19600 pesetas y de indemnizaciones 321'60 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento decidiendo los licitadores atenerse a los pliegos de condiciones que obran de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento.

Almárza de Cameros a 5 de enero de mil novecientos cincuenta y nueve

El Alcalde

49

ANUNCIO

52

Acordado por la Corporación municipal queda expuesto al público durante el plazo de 15 días el expediente número 1 de transferencias de créditos dentro del presupuesto municipal ordinario en vigor.

Ventrosa 31 de diciembre de 1958

El Alcalde

45

ANUNCIO

51

Por acuerdo de este Ayuntamiento el próximo día 26 de enero y hora de las doce tendrá lugar en el Salón de actos de esta Casa Consistorial la segunda subasta para la enajenación de 156 chopos maderables, que cubican 70 m3 de madera bajo el tipo de tasación de 50.400 pesetas equivalente al 10 por ciento de rebaja en relación al tipo de tasación de la primera subasta. Los Pliegos de condiciones se hallan de manifiesto en esta Secretaría municipal.

El Ayuntamiento no sale responsable de la inexactitud de la cubicación Terroba de Cameros a 24 de diciembre de 1958.

El Alcalde

46